Universidad Santo Tomás

Maestría en defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante
Organismos, Cortes y Tribunales Internacionales

La rectificación, una alternativa frente al debate sobre la difamación criminal

Artículo de reflexión presentado por Germán Suárez Castillo (II Cohorte)

Director Dr. Camilo Sánchez

Bogotá, octubre 17 de 2012

Resumen

Como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando es hecho a través de los medios de comunicación, el derecho a la rectificación opera como mecanismo de garantía para quienes resultan afectados por las publicaciones periodísticas. Sin embargo, también puede invocarse, bajo ciertas condiciones, como alternativa de salvación para los periodistas en los procesos penales por difamación, según la variada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia elaborada como aporte al futuro trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de este derecho poco conocido, que incluso no ha sido tratado de fondo en los procesos contenciosos sometidos a su jurisdicción.

Palabras claves

Libertad de expresión, difamación criminal, derecho a la rectificación, jurisprudencia, Corte Interamericana, Corte Constitucional

Abstract

As part of the right to freedom of expression, particularly when it is exercised through the mass media, the right to rectification works as an assurance mechanism for those who are affected by journalistic publications. However, it can also be invoked under certain conditions as a saving alternative for journalists in criminal proceedings for defamation, according to the varied jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia developed as a contribution to the future work of the Inter-American Court of Human Rights in the protection of this little known right, whose substance has not even been evaluated in contentious procedures submitted to its jurisdiction.

Key words

Freedom of expression, criminal defamation, jurisprudence, right of rectification, Interamerican Court, Constitutional Court

LA RECTIFICACIÓN, UNA ALTERNATIVA FRENTE AL DEBATE SOBRE LA DIFAMACIÓN CRIMINAL

En el ámbito de los derechos humanos, Colombia enfrenta desde hace algunos años un importante debate en materia de la protección que merece la libertad de expresión, particularmente cuando es sometida a la aplicación del derecho penal para garantizar los derechos de las personas afectadas por el ejercicio del periodismo a través de los medios de comunicación.

Como medida legal de responsabilidad posterior derivada del ejercicio de la libertad de expresión, la difamación criminal opera en nuestra legislación como mecanismo de protección, defensa y reparación de los derechos de quienes sufren daños ocasionados por las publicaciones periodísticas.

Dicha circunstancia originó el surgimiento de una fuerte reacción de los periodistas, comunicadores, medios de comunicación y asociaciones gremiales contra la vigencia de la difamación criminal, al punto de considerarla un obstáculo para la libertad de expresión y la libertad de prensa en Colombia, por los efectos negativos que genera para el ejercicio del periodismo.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene un estándar reiterado que limita la aplicación de la difamación criminal frente a la libertad de expresión, su variada jurisprudencia no tiene definido el alcance del derecho a la rectificación como herramienta para enfrentar los procesos penales contra comunicadores y periodistas por la difamación causada por el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde esta perspectiva, el derecho a la rectificación de informaciones surge como alternativa importante en el debate sobre la difamación criminal. En esta materia, el trabajo de la Corte Constitucional de Colombia ofrece amplios criterios que contribuyen a la futura construcción de la jurisprudencia internacional en esta controversia relevante.

El aporte hecho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional es significativo en momentos en que la protección de los derechos humanos comienza a mirarse desde la base del vértice normativo y estructural, donde los tribunales internos ayudan a la consolidación de la labor de los organismos que están en la cúspide del sistema internacional.

El artículo de reflexión está basado en la lectura y análisis de 31 referencias bibliográficas de proyectos de ley, libros, textos y artículos y 80 sentencias dictadas en procesos ordinarios, acciones de tutela, acciones de constitucionalidad y casos del sistema interamericano. En todas ellas, durante los últimos veinte años, fueron abordados aspectos relevantes de la difamación criminal y del derecho a la rectificación en ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación.

Luego de esta introducción, la primera parte del artículo desarrolla el panorama normativo del derecho a la rectificación en el sistema interamericano, la segunda aborda la controversia sobre la difamación y el derecho a la rectificación en el derecho interno y la

tercera describe los principales criterios aplicados por la Corte Constitucional de Colombia en materia del derecho a la rectificación de informaciones frente al trabajo de los medios de comunicación.

PANORAMA INTERNACIONAL

En el sistema regional de protección de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión está previsto en el artículo trece de la Convención Americana, donde aparecen garantizadas las libertades de pensamiento, expresión, información, opinión, la prohibición de la censura previa y algunas limitaciones impuestas al ejercicio de este derecho, según la precisa descripción hecha por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003).

En desarrollo de su mandato, el instrumento internacional dispuso que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sometido a responsabilidades ulteriores, que serán fijadas por las leyes y necesarias para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

Desde este punto de vista, compartimos la posición asumida por Bertoni (2004) según la cual la difamación constituye una de aquellas responsabilidades ulteriores derivadas del ejercicio de la libertad de expresión, en la medida en que está destinada a la protección del derecho a la reputación y de otros derechos de la personalidad afectados por el trabajo de los medios de comunicación.

Estrechamente ligado a la libertad de expresión, el artículo catorce de la Convención Americana incluyó el derecho a la rectificación de informaciones, también conocido como

derecho de respuesta¹, precisamente dispuesto para quienes resultan afectados por algunas informaciones divulgadas a través de los medios de comunicación en desarrollo del trabajo periodístico.

El artículo catorce del citado instrumento internacional, lo describe así:

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

Al respecto, la doctrina de la Corte Interamericana (1986) mantiene un criterio según el cual el derecho a la rectificación de informaciones es un derecho al cual son aplicables las obligaciones básicas de respeto y garantía previstas, para los estados partes, en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

Agregó que esta interpretación es adecuada a partir de la ubicación sucesiva de los derechos a la libertad de expresión y a la rectificación de informaciones en los artículos trece y

¹ Algunos autores como Zannoni y Bísaro (2003) también lo denominan como *derecho de réplica*, en lo que coincide Pizarro (2004) en su conocido texto sobre el daño moral y en el cual incluye un análisis interesante sobre el derecho de réplica como instrumento de tutela preventiva de los derechos de la personalidad frente a los medios de comunicación.

catorce de la Convención Americana, respectivamente, ya que el primero de tales derechos no puede entenderse en una forma tan amplia que haga nugatorio el derecho a la rectificación.

La jurisprudencia adoptada por la Corte Interamericana (2004, 2008 y 2009) en los casos *Herrera Ulloa vs Costa Rica*, *Canese vs Paraguay*, *Kimel vs Argentina* y *Usón Ramírez vs Venezuela* es amplia, clara y precisa al limitar considerablemente la aplicación de la difamación respecto del ejercicio de la libertad de expresión, especialmente cuando involucra la discusión de asuntos públicos.

No obstante, aquel despliegue dado al alcance del artículo trece de la Convención Americana contrasta notablemente con la poca importancia que el trabajo de la Corte Interamericana brinda al artículo catorce del tratado internacional, puesto que el derecho a la rectificación tiene escaso tratamiento en los casos contenciosos sobre libertad de expresión, como lo muestran Cejil (2003) y Grossman (2007).

EL DEBATE INTERNO

Pese a que la Corte Constitucional de Colombia mantiene un criterio reiterado según el cual la libertad de expresión no es un derecho absoluto, nuestro país registra desde hace algunos años una batalla a favor de la libertad de expresión ejercida a través de los medios de comunicación y contra la aplicación de la difamación criminal hacia los comunicadores y periodistas.

En la doctrina jurídica y periodística, la campaña surgida contra la difamación desplegó diferentes alternativas como las propuestas legales de despenalización de la figura en la

Cámara de Representantes (2008), la invocación de los estándares internacionales sobre esta materia y la demanda de inconstitucionalidad resuelta por la Corte Constitucional (2011) contra las normas que sustentan este delito, sin que la libertad de expresión haya logrado prevalecer, *per se*, sobre los derechos a los cuales se enfrenta su ejercicio.

El nivel de controversia es tan evidente que en la justicia colombiana muestra dos tendencias opuestas. En las sentencias absolutorias dictadas en los últimos seis años a favor de los comunicadores Alfredo Molano Bravo en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Bogotá (2010) y Claudia López en el Juzgado 23 Penal Municipal de Bogotá (2011), los jueces brindaron especial tratamiento a la libertad de expresión por encima de los derechos de terceros. En sentido contrario, en las sentencias condenatorias proferidas contra los periodistas Graciela Torres Sandoval en el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá (2006) y Luis Agustín González en el Tribunal Superior de Cundinamarca (2012), el derecho a la honra de las personas sobrepasó en sus alcances a la libertad de expresión.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004 y 2008) cuenta con una amplia y vigorosa jurisprudencia que condiciona la aplicación de la difamación criminal al ejercicio de la libertad de expresión en el ejercicio informativo, en el debate público y en los géneros de opinión, sus estándares no tienen mucha acogida por parte de los jueces de instancia en los procesos ordinarios por difamación.

Frente a este panorama y en desarrollo del debate, el derecho internacional de los derechos humanos y su incorporación en el derecho interno, como ocurre en Colombia, ofrece una alternativa para enfrentar, en el propio campo de los derechos, los efectos que la difamación

criminal tiene sobre el ejercicio de la libertad de expresión hecho en los medios de comunicación.

Se trata precisamente del derecho a la rectificación, cuya eficacia contra la difamación criminal, a pesar de ser clara, incluso en las normas penales, es puesta en duda por los comunicadores y periodistas cuando se enfrentan a las acciones seguidas por la eventual violación de derechos de terceros.

De tiempo atrás, un importante sector de la doctrina, encabezado por Villalobos (1984) calificó la rectificación de informaciones como *un derecho olvidado* debido al poco conocimiento que sobre su regulación y ejercicio tienen los propios comunicadores y periodistas.

A pesar de este factor, el derecho a la rectificación de informaciones, en el caso de Colombia, realmente constituye una garantía para enfrentar la difamación criminal cuando su aplicación incide negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión, en especial cuando tiene lugar en el campo periodístico e informativo.

NORMAS INTERNAS VIGENTES

En cuanto a la tipificación de difamación criminal, en el ordenamiento colombiano dicha figura aparece genéricamente prevista en el Código Penal, vigente desde el año 2000. Sus modalidades no están establecidas como conductas exclusivas de quienes ejercen la libertad de expresión en los medios de comunicación sino que tienen como sujeto activo a toda persona.

A diferencia de las legislaciones de otros países, en el derecho colombiano, según la tradición jurídica expuesta por Pérez (1998) y por la Corte Constitucional (2009), la difamación criminal no constituye una sola figura porque su aplicación está basada en dos tipos penales: los delitos de injuria y calumnia.

En el título correspondiente del Código Penal, el bien jurídico que el legislador protegió con la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, como especies de la difamación, es la integridad moral. Esta noción cubre derechos como la honra, el buen nombre y otros derechos de la personalidad como la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la identidad personal, de acuerdo con la interesante clasificación formulada por Fernández (2004).

En los últimos quince años, el derecho interno vive una polémica planteada por diversos sectores que estiman necesaria la abolición de tales delitos de la legislación penal, por considerar que son anacrónicos y que su aplicación, en la práctica, resulta difícil para los jueces.

El debate alcanzó importancia luego que la Corte Interamericana (2004 y 2008) dictó las sentencias de los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica y Kimel vs Argentina, donde concluyó que en algunos casos la aplicación de la responsabilidad penal al ejercicio de la libertad de expresión, a través del periodismo, crea un efecto inhibitor que incide negativamente en la garantía de este derecho.

No obstante, cuando tuvo lugar la expedición del Código Penal vigente desde el año 2000, antes de los citados fallos del sistema interamericano, la comisión redactora del proyecto puesto a consideración del Congreso de la República, concluyó que la difamación debía

mantenerse por tratarse de los pocos mecanismos que tenía la persona para la defensa de su reputación.

Recientemente, la Corte Constitucional (2011), al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra esos delitos, respaldó la vigencia de tales normas y señaló que el hecho de mantener la tipificación de la injuria y la calumnia en la legislación penal no es contraria, por sí misma, a los postulados de la Convención Americana ni al ejercicio de la libertad de expresión.

En esta materia, no puede pasar inadvertido que el Código Penal establece que la imputación de hechos constitutivos de injuria o calumnia, según el caso, hecha a través de los medios de comunicación, o inclusive de los medios de divulgación colectiva, es circunstancia agravante que permite al juez el incremento de la pena de una tercera parte a la mitad.

En lo que corresponde a la rectificación de informaciones, según puede verse en Restrepo (2007), esta figura alcanzó la categoría de derecho fundamental con eficacia directa a partir de la promulgación de la Constitución de 1991². Está regulada en el artículo veinte, junto con las libertades de la comunicación, mediante una fórmula sencilla según la cual “(...) *Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad*”.

² Antes de 1991 ninguna de las constituciones colombianas incluyó alusión expresa al derecho a la rectificación como parte de las garantías ciudadanas, a pesar que la libertad de expresión y la libertad de opinión estuvieron reconocidos como derechos en la Constitución de la República de Colombia de 1821, el decreto orgánico de la dictadura de Bolívar de 1828, la Constitución Política de la República de Colombia de 1830, la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1843, la Constitución de la República de la Nueva Granada de 1853, la Constitución para la Confederación Granadina de 1858, el Pacto de Unión de 1861, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 y en la Constitución Política de Colombia de 1886.

Sin embargo, la norma no puede ser aplicada aisladamente a instancias del enunciado constitucional sino que resulta indispensable buscar la correspondencia con las previsiones vigentes sobre la materia, ya que desde hace años el Congreso expidió diversas disposiciones legales que regulan la rectificación de informaciones frente a los medios de comunicación.

A pesar de ser anteriores a la Carta Fundamental de 1991, dichas leyes conservan parcialmente su vigencia y son aplicables al trámite de la rectificación, en cada medio de comunicación, por cuanto sus preceptivas no se oponen a la regulación constitucional, ni al artículo catorce de la Convención Americana como garantía frente al ejercicio de la libertad de expresión.

En los diferentes medios impresos, cobijados en el concepto genérico de prensa escrita, la rectificación está regulada en el artículo 19 de la ley 29 de 1944, tradicionalmente conocida como Ley de Prensa, así:

“Todo director de periódico está obligado a insertar gratuitamente, dentro del tercer día de recibo, si se tratare de diario, o en el número próximo más inmediato, si no lo fuere, las rectificaciones o aclaraciones que se le dirijan por particulares, funcionarios públicos, corporaciones o entidades, con motivo de relaciones falsas de sus actos, o a quienes se haya ofendido con conceptos injuriosos en dicho periódico, siempre que tales rectificaciones no tengan carácter injurioso” y agregó que *“La extensión del escrito de rectificación no podrá exceder de una columna, salvo en aquellos casos en que la naturaleza del asunto exija un espacio mayor. La rectificación o aclaración de que se trate*

debe publicarse en el mismo lugar y tipo en que se publicó el escrito que lo motiva y con las mismas características, incluyendo los titulares”.

En el ámbito de la radiodifusión, la rectificación está reglamentada en las normas legales que rigen la programación informativa, noticiosa y recreativa que se transmite a través de las estaciones autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Antes de la Constitución de 1991, dicho mecanismo fue regulado por el Congreso en el Estatuto de Radio, adoptado mediante la ley 74 de 1966, de la siguiente manera:

“Los titulares de las licencias para funcionamiento de servicios de radiodifusión, y los directores de programas informativos o periodísticos, están obligados a transmitir gratuitamente y sin comentarios, en la programación siguiente al recibo de la solicitud, las rectificaciones y aclaraciones a que dieron lugar las noticias, comentarios, conferencias o discursos transmitidos, y que las personas afectadas consideren injuriosos, calumniosos o inexactos. Tal transmisión deberá hacerse a la misma hora en que se transmitió la que dio lugar a la aclaración”.

La norma es aplicable pese a que sus alcances son limitados frente al notable avance de la radio colombiana en sus diferentes modalidades y en los campos tecnológico y periodístico. Ante esta situación, mediante el decreto No. 2805 de 2008, el entonces Ministerio de Comunicaciones expidió el nuevo reglamento general del servicio de radiodifusión sonora en el país, que en su artículo 32 señaló:

“Los concesionarios del Servicio de Radiodifusión Sonora están en la obligación de transmitir gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones a que diere lugar las

informaciones inexactas divulgadas al público, en el mismo horario y con idéntica importancia a la del programa o programas que las hayan originado”.

La nueva disposición no introdujo mayores cambios respecto de la regulación inicialmente adoptada, dado que conserva sus alcances en cuanto a los titulares y sujetos pasivos del derecho a la rectificación, la forma en que deberá hacerse y el horario de transmisión de la solicitud. El objetivo de ambas normas es permitir al afectado la rectificación de aquellas versiones cuyo contenido no guarde el grado de exactitud o constituya una imputación injuriosa o calumniosa.

En materia de televisión, en sus diferentes modalidades, la rectificación tiene serias diferencias con los restantes medios de comunicación, ya que el Estatuto de Televisión dispuso un término de caducidad de diez días para el ejercicio de la rectificación. También incluyó una especie de silencio positivo que presume resuelta la solicitud a favor de afectado, cuando el programa no atienda la rectificación en el plazo de siete días previsto en la ley, como ilustrativamente aparece explicado en la Comisión Nacional de Televisión (2011).

Aunque la mayoría de las controversias relacionadas con la rectificación de informaciones están circunscritas a la posible responsabilidad penal derivada de la difamación criminal, dicha circunstancia no es obstáculo para tener en cuenta que el llamado ejercicio abusivo de la libertad de expresión también puede generar responsabilidad de carácter civil.

En Colombia, la responsabilidad civil de los medios de comunicación está prevista en la llamada Ley de Prensa, donde quedó establecido que quien cause daño a otro por el ejercicio de su trabajo a través de los medios de comunicación estará obligado a

indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurrió en culpa, según la explicación hecha por Ballesteros (2005) y Tamayo Jaramillo (2007).

Esta modalidad de responsabilidad por daños cobra especial relevancia en la actualidad, luego que recientemente, en una sentencia sobre el tema, la Corte Interamericana (2012) advirtió que en algunos casos, en los medios de comunicación, *“(...) el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibitor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal (...)”*.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

En medio del debate actual, la aplicación de la difamación criminal al ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, en sus modalidades de injuria y calumnia, no puede entenderse desligada del derecho a la rectificación de informaciones.

Esto obedece a que el propio Código Penal estableció que si la rectificación de la información es hecha antes de presentarse la denuncia por injuria o calumnia, o incluso antes de dictarse sentencia de primera instancia, el autor del delito no podrá ser castigado penalmente.

Desde esta óptica, la rectificación de informaciones no solamente es un mecanismo de protección que opera a favor del afectado sino que también constituye un medio de defensa disponible para quien, en ejercicio de la libertad de expresión, incurre en las conductas típicas de la difamación criminal, como lo expuso Botero (2002) al explicar los alcances de tales normas.

En el caso de los comunicadores y periodistas, la rectificación es la herramienta mediante la cual pueden frenar los efectos negativos de los procesos por difamación. La legislación penal excluye la responsabilidad penal para quien haga la rectificación voluntaria, gratuita y por el mismo medio de comunicación, antes de presentarse la denuncia o antes de que sea dictada la sentencia de primer grado.

Así, no puede entenderse que en procesos por injuria o calumnia algunos comunicadores y periodistas llegan a conciliaciones con los afectados en las cuales ofrecen la rectificación de la información pese a que el Código Penal permite acudir a dicho beneficio sin consentimiento del afectado, lo que demuestra el escaso conocimiento sobre la operancia de esta figura³.

El derecho a la rectificación cobra eficacia como alternativa contra la difamación criminal en la medida en que su ejercicio impide la iniciación del proceso penal contra los comunicadores y periodistas e inclusive permite la terminación anticipada de la actuación judicial, estando en curso, cuando sea demostrado al juez que la rectificación fue hecha adecuadamente.

Es, precisamente, frente a tales posibilidades donde adquiere especial importancia la serie de criterios adoptados por la Corte Constitucional sobre el ejercicio del derecho a la rectificación. El beneficio previsto en la legislación penal opera cuando la rectificación cumple las condiciones necesarias para que repare el derecho de quien fue afectado con el trabajo periodístico.

³ Por ejemplo, en dos actuaciones penales adelantadas contra el diario El Espectador y el conocido columnista de opinión Oscar Collazos por los delitos de calumnia, la solución ofrecida en desarrollo del trámite conciliatorio fue la rectificación de la información, a pesar que podía hacerse dentro del trámite de la actuación que, en ambos casos, no había alcanzado la etapa de pruebas.

La simple invocación del derecho a la rectificación no excluye la responsabilidad periodística derivada de la difamación, pues está sometida a determinados requisitos y condiciones para que pueda operar como mecanismo de garantía de la libertad de expresión y de los derechos de quienes son afectados por su ejercicio, como puede verse en la exposición hecha por Uprimny (2006).

Desde la vigencia de la Constitución de 1991, que incorporó los tratados internacionales sobre derecho humanos al ordenamiento jurídico interno, según la noción del bloque de constitucionalidad descrita por Uprimny (2002) y Fajardo (2009), la Corte viene desarrollando amplia y variada jurisprudencia sobre el derecho a la rectificación, especialmente cuando involucra el ejercicio por los medios de comunicación.

A. Conflicto de derechos

Un aporte relevante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indudablemente servirá de parámetro para casos similares en el sistema interamericano, está relacionado con la naturaleza jurídica de la actuación que surge a instancias del ejercicio del derecho a la rectificación.

Al declarar parcialmente inexecutable la norma del Estatuto de Televisión que regula esta figura, la Corte (2003) precisó que la rectificación de informaciones involucra directamente un conflicto sobre derechos fundamentales, por lo cual su trámite no puede quedar a cargo de autoridades administrativas sino que debe resolverse por los jueces.

Agregó que la intervención que hacía la antigua Comisión Nacional de Televisión en el curso de las solicitudes de rectificación, como refuerzo de los derechos del afectado,

implicaba una clara restricción a la libertad de información y a los derechos de los comunicadores.

“La norma examinada, en lo que concierne al comunicador, degrada la garantía constitucional de su libertad de informar, puesto que al generarse una controversia sobre si debe o no rectificar, absteniéndose o no a dar curso a la petición de la persona que se estima agraviada, en lugar de plantear la defensa de su derecho fundamental ante el juez natural constitucional, debe hacerlo ante la administración, si ocurre que el demandante decide optar por el procedimiento administrativo, exponiéndose por este camino además a ser objeto de sanciones administrativas que pueden significar la extinción misma de la empresa comunicativa...”, señaló la Corte en su fallo.

B. Procede contra informaciones

En general, la doctrina jurídica y periodística coincide en que el derecho a la rectificación procede únicamente contra las distintas modalidades del periodismo informativo propias de los medios representativos de la prensa, la radiodifusión y la televisión y los nuevos medios, como lo muestran, entre otras, las tendencias de Bertoni (2006) y Zannoni y Bísaro (1993).

Esto hace que en el ámbito periodístico se admita la rectificación de informaciones, pero se descarte, por su esencia, su aplicación respecto de manifestaciones características de los tradicionales géneros de opinión como el editorial, la columna, la caricatura y la llamada fotocomposición.

Las previsiones normativas establecidas en el artículo veinte de la Constitución y el artículo catorce de la Convención Americana regularon la vigencia de la rectificación solamente frente a informaciones. También, el sistema interamericano viene proponiendo que no exista ningún tipo de responsabilidad cuando la información que origine acciones judiciales contra medios y periodistas esté basada en juicios de valor, según la doctrina recogida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003).

No obstante, la práctica judicial colombiana muestra una percepción diferente, amplia en sus alcances, que en algunos casos permite invocar el derecho a la rectificación respecto de los géneros de opinión cuando su ejercicio afecta derechos de terceros, como la honra y el buen nombre.

La acogida brindada a este criterio, que acepta la rectificación tanto para informaciones como para opiniones, es el fundamento de diversas acciones judiciales promovidas desde hace algunos años contra columnas de opinión, editoriales de prensa e inclusive caricaturas⁴.

El origen de esta controversia, como lo expuso Carvajal (1995), se remonta al año 1993 cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la rectificación de una columna de opinión publicada por una periodista en la revista Semana. La decisión fue criticada en diversos sectores de la doctrina periodística porque implicaba que la columnista tuviera que

⁴ Por ejemplo, pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional T-1202 de 2000 magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa y T-1198 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, que fueron falladas en sede de revisión para la rectificación de un editorial de prensa y una columna de opinión, respectivamente.

rectificar la posición subjetiva asumida frente a un asunto que involucraba su juicio de valor sobre la conducta de un antiguo funcionario.

Desde un principio, al abordar las tensiones entre los derechos de terceros y el ejercicio periodístico, la Corte Constitucional (1993) reconoció los amplios alcances, casi sin restricciones, que tiene la libertad de opinión como manifestación esencial del pensamiento. Según la corporación, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, según lo establecido en la Constitución, sólo es predicable respecto de las informaciones cuya esencia es básicamente el relato de hechos y circunstancias fácticas.

A partir de esta interpretación, podría concluirse inicialmente que la invocación de esta garantía estaba circunscrita específicamente a las modalidades informativas características de los medios de comunicación, como la noticia, el reportaje, la crónica y el informe periodístico.

Agregó la Corte que la rectificación no es procedente frente a las opiniones y pensamientos, por cuanto “... *es un imposible material pedir que se rectifique un pensamiento u opinión, porque sólo es posible rectificar lo falso o parcial, más no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la manifestación de pensamientos y opiniones*”.

Esta línea jurisprudencial fue mantenida por la Corte (1998) en posteriores sentencias dictadas sobre la materia, hasta el año 2010, incluyendo aquella que declaró inexecutable el Estatuto del Periodista, al punto que calificó a la libertad de opinión como un *riesgo ínsito* al sistema democrático.

Sin embargo, al estudiar nuevos casos, la Corte (2001) introdujo significativas variaciones que llevaron a establecer algunas condiciones para el ejercicio de la libertad de opinión hecho a través de los medios de comunicación. En una de sus sentencias, advirtió que la libertad de opinión garantizada en la Constitución no tiene carácter absoluto y puede ser sometida a ciertos controles excepcionales cuando su ejercicio sea abusivo y desconozca derechos de terceros.

En tales casos, según la corporación, la situación tendrá que ser objeto de prueba frente a las circunstancias concretas para establecer las posibles restricciones o sanciones que puedan imponerse a quienes desborden los parámetros que regulan el ejercicio responsable de este derecho.

La controversia alcanzó su punto culminante cuando la Corte (1998 y 2000) sostuvo que la tutela no era aplicable al periodismo de opinión, cuando dicha acción fuese invocada precisamente como mecanismo para la eficacia del derecho a la rectificación. Señaló que la improcedencia estaba circunscrita *“respecto de las opiniones en sí mismas, sin perjuicio de entender que el ejercicio responsable de la libertad de prensa exige que el medio diferencie claramente las opiniones que le merece cierta información de los datos que obtiene a través de sus investigaciones (...)”*.

Era claro, entonces, que frente a las columnas y editoriales de prensa, como representativos clásicos del género de opinión, la rectificación en principio no podía ser interpuesta para modificar la posición subjetiva adoptada por sus autores con fundamento en juicios de valor.

No obstante, al consolidar este criterio tendiente a unificar las posiciones dispares de las salas de revisión sobre la materia, la Corte no descartó en términos absolutos la aplicación de la rectificación en los géneros de opinión. Así, quedó abierta la posibilidad excepcional de la rectificación en los eventos en que la columna o el editorial tengan un componente informativo que trascienda a la simple difusión de opiniones y pensamientos basados en juicios de valor⁵.

Luego, la Corte (2003) admitió la alternativa de ordenar la rectificación de opiniones en los casos en que el sustento de tales juicios sean hechos y especulaciones no comprobados, que afectan la honra y el buen nombre de terceros, cuando son presentados al público como si fueran ciertos.

La Corte (2004) admitió la rectificación de columnas de opinión cuando su contenido presente alto grado de inexactitud por ausencia de hechos ciertos que sirvan de soporte a las opiniones, que lleva al público a tener dichas valoraciones como reales en detrimento del buen nombre de terceros⁶.

El criterio actual de la Corte que admite la rectificación no contra las opiniones en sí mismas sino contra aquellas que incluyan aspectos fácticos, también es relevante para las futuras decisiones de la Corte Interamericana particularmente ahora cuando la redacción periodística muestra una tendencia a la mezcla, a veces indiscriminada, de hechos y opiniones.

⁵ Sobre la distinción clara que debe existir entre la información y la opinión, para efectos de su tratamiento, puede consultarse la sentencia T-080 de 1993, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

⁶ Corte Constitucional, sentencia T-1198 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. Mediante esta sentencia, la Corte ordenó una rectificación a un columnista del entonces semanario El Espectador, respecto de la denuncia de supuestas irregularidades de una funcionaria pero dejó clara la ausencia de responsabilidad del medio de comunicación respecto de las opiniones expresadas por sus columnistas.

Un reconocido sector de la doctrina comparte la aplicación excepcional de la rectificación a los géneros de opinión, pues Zannoni y Bísaro (2003) estiman que dicha posibilidad es viable en los casos de opiniones atribuidas a terceros, que el medio de comunicación recoge, porque la valoración se transforma en un hecho que hace procedente el derecho de respuesta.

En el marco de los géneros de opinión, desde sus primeros años la Corte Constitucional (1992) adoptó la tesis de la improcedencia del derecho a la rectificación frente a una especialísima modalidad de opinión, como es la caricatura. Esta situación obedece, según explicó la Corte, a que “... *sería un trámite inútil e innecesario el de pedir rectificación cuando, por su propia naturaleza, el material publicado no lo admita...*” como sucede precisamente en “... *el caso, por ejemplo, de la caricatura...*”.

Al margen del análisis sobre el trabajo informativo y de opinión, la Corte admitió la posibilidad excepcional de ejercer el derecho a la rectificación contra avisos publicitarios insertos en los medios impresos y cuñas radiales. Esta alternativa poco usual no cubre toda clase de avisos sino únicamente aquellos que contienen imputaciones que ponen en riesgo los derechos de terceros y según la Corte busca que la opinión pública adquiera mayores elementos sobre las aseveraciones hechas en su texto⁷. En el sistema radial, la rectificación para restablecer los derechos de los afectados le corresponde al anunciante cuya publicidad negativa es causante del daño.

⁷ Sobre la procedencia excepcional de la rectificación de informaciones contra los avisos pautados en la prensa puede consultarse la sentencia T-411 de 1995. En este proceso, la Corte Constitucional advirtió sobre el deber que tienen los medios de examinar y verificar el contenido de las informaciones pagadas por particulares en punto de garantizar la veracidad. También puede verse la sentencia T-381 de 1994, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara. En cuanto a la rectificación de cuñas en el sistema de radiodifusión puede consultarse la sentencia T-959 de 2006.

Hacia el futuro, este novedoso criterio debe ser objeto de análisis en el sistema interamericano, dado que la posible responsabilidad judicial derivada del contenido de los avisos y cuñas publicitarias le corresponde al anunciante porque el medio de comunicación es ajeno a la controversia por carecer de interés en el contenido de la información comercial.

C. Alcances de la equidad

El aspecto que genera mayor polémica es la rectificación en condiciones de equidad, por cuanto no existe consenso sobre el alcance del mandato constitucional. Cuando la Carta Política dispuso la rectificación en condiciones de equidad, la lectura taxativa de esta exigencia podría llevar a pensar que la solicitud del interesado requiere el mismo despliegue dado a la publicación hecha por el medio.

Sin embargo, el espacio destinado para la rectificación es decidido por el medio según su criterio, lo cual hace que en ocasiones carezca de la importancia necesaria para reparar al afectado por la versión periodística. Esto hace que el derecho a la rectificación, como garantía del equilibrio informativo, enfrente algunos problemas de eficacia por el escaso despliegue dado a las reclamaciones de terceros.

En la práctica periodística, la información que es objeto de rectificación generalmente tiene poco despliegue en comparación con la versión publicada que causa afectación a terceros. Dicha circunstancia origina el trámite de acciones judiciales contra los medios de comunicación tendientes al restablecimiento de los derechos de los afectados por las publicaciones periodísticas.

Desde 1991, el trabajo de la Corte estuvo centrado en definir las pautas generales dirigidas a precisar los alcances de la rectificación. En sus primeros años, la corporación dictó algunos fallos en los cuales otorgó prevalencia a los derechos de terceros, pues implementó criterios prácticamente matemáticos para garantizar la equidad informativa.

Un caso resuelto a raíz de la rectificación interpuesta contra un periódico editado por un organismo cooperativo, de circulación restringida, llevó a la Corte (1992) a ordenar una rectificación idéntica a la difusión que inicialmente tuvo la noticia que afectó a un dirigente del sector.

Para salvaguardar el equilibrio informativo orientado a la reparación del buen nombre, la Corte ordenó la rectificación en la primera página del medio y con un despliegue destacado entre las noticias de la respectiva edición. Además, incluyó en la parte resolutive de la sentencia el título y la versión textual, en tres párrafos, que el periódico debía incluir en su edición siguiente.

Posteriormente, la Corte (1993) resolvió una controversia surgida por la publicación hecha por la revista Cromos, de circulación nacional, sobre el supuesto manejo irregular de un crédito estatal concedido a una compañía particular para la producción de una película de cine. Al destacar la incidencia que una publicación inexacta tiene sobre la valoración social de la persona, la Corte consideró que la rectificación hecha por la revista, que involucró al propietario de la empresa productora de cine, tampoco cumplía las exigencias de equidad para reparar su honra. En consecuencia, ordenó publicar la rectificación en un número de ejemplares igual a aquel en el cual circuló la primera versión, con el mismo despliegue gráfico y la misma fotografía que inicialmente acompañó el texto.

En los años siguientes, la corporación no registró nuevos casos de aplicación del criterio matemático sobre la equidad informativa, ya que su jurisprudencia reiteró la alusión general al equilibrio informativo.

En una segunda etapa, la Corte (1996 y 1998) abandonó el criterio matemático como medida de la equidad informativa, para evolucionar hacia una noción de equilibrio informativo sustentado en las características de la versión inicialmente publicada por el medio.

Incluso, la Corte admitió la posibilidad que la rectificación fuera hecha por el medio en extensión inferior a la versión que causó la afectación, ya que el nuevo tratamiento de la información tenía mayor relevancia que el problema del espacio asignado. En alguna medida, esta tesis sacrificó la reparación del afectado porque la rectificación podía publicarse en ciertos espacios reducidos establecidos por el medio, cuyo escaso despliegue no era equivalente a la difusión de la versión susceptible de corrección. Dicho cambio fue adoptado en una sentencia donde el afectado reclamó la violación de la garantía de la equidad porque la rectificación no fue divulgada en la misma sección y con el mismo despliegue que la noticia referida a su relación reglamentaria con una entidad estatal.

No obstante, poco después la Corte (1998) revaluó su criterio sobre el espacio asignado para la rectificación en aquellas páginas y secciones consideradas importantes por los medios para la divulgación de las reclamaciones de los afectados. Advirtió que en procura de la equidad, la inserción de la rectificación en dicho espacio específico de determinada página no podía tenerse como referente exclusivo para atender las solicitudes formuladas por quienes son afectados por sus publicaciones. Agregó que el medio debe hacer un

análisis que permita brindarle equilibrio a la rectificación de manera similar al despliegue del cual fue objeto la versión que causó detrimento a quien acude con la pretensión de restablecer sus derechos.

A comienzos del año 2000, la Corte reconoció mayor libertad a los medios para el tratamiento de la rectificación sin exigir equivalencia matemática, pero condicionada a las directrices que disponga el juez cuando decida las acciones judiciales promovidas por terceros.

Luego, la Corte (2007) manifestó:

“(…) para que la rectificación en condiciones de equidad se acomode a los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido los siguientes requisitos generales: (i) que la rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo equivalente al que tuvo la noticia inicial; y (ii) que el medio de comunicación reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad” y agregó que “en relación con la garantía de equivalencia ha indicado que ésta no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues de lo que se trata es que el lector o receptor pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado”.

En cumplimiento de tales postulados, actualmente el trabajo de los jueces se dirige hacia la garantía de reparación que ofrece la rectificación equitativa de informaciones, sin descuidar los derechos que corresponden al medio dentro de las controversias judiciales. Pese a que la rectificación aspira a lograr el equilibrio frente a la información publicada, es claro que no pueden imponerse a los medios requisitos indefinidos y abstractos que incluso dificultan el cumplimiento voluntario de los fallos judiciales.

En sentencia dictada después de las acciones interpuestas por un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura contra varios medios, periodistas y columnistas, la Corte (2009) destacó la necesidad de garantizar el debido proceso a los medios de comunicación en desarrollo de la rectificación de informaciones. Adoptó el criterio de razonabilidad que permite que el medio de comunicación maneje la equidad con base en las pautas establecidas por los jueces, al resolver las acciones promovidas por terceros, sin que requiera despliegue idéntico a la publicación inicial.

D. Las condiciones de trámite

La norma que reglamenta el trámite de las acciones de tutela para la protección de los derechos fundamentales, estableció que quien invoque la rectificación deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren su eficacia.

Esto significa que la persona afectada con la información necesariamente tendrá que solicitar la rectificación de dicha versión al medio de comunicación antes de acudir donde el juez, pues dicha petición previa es requisito de procedibilidad para que la tutela pueda ser

ejercida posteriormente ante la jurisdicción, cuando la rectificación no haya sido aceptada o no sea acogida adecuadamente por la empresa informativa⁸.

Sin embargo, esta regla que sustenta la obligación de formular la rectificación ante el medio admite excepciones, ya que la Corte (1992 y 2004) señaló algunas situaciones específicas en las cuales no es necesario cumplir dicho procedimiento previo. Esto sucede en los casos de violación de la intimidad personal y familiar, por parte del medio de comunicación, dado que la rectificación no puede reparar la revelación de hechos que no debieron trascender al público y además la nueva publicación agravaría la vulneración del derecho.

Otro aporte importante hecho por la Corte (2007), que también podría tenerse como pauta para el sistema interamericano, es el referente al término que tiene el afectado para el ejercicio de la rectificación, cuando las legislaciones, como en los casos de la prensa y la radiodifusión, no incluyen norma sobre el particular. Aunque la solicitud podría presentarse en cualquier tiempo a partir de la publicación hecha por el medio, este criterio no puede entenderse en términos absolutos por cuanto la Corte advirtió que la rectificación deberá interponerse dentro de un plazo razonable siguiente a la publicación.

El transcurso prolongado del tiempo sin que haya sido ejercida la rectificación ante el medio, prácticamente implicaría aceptar que el afectado con la publicación, en alguna medida, consintió la vulneración de sus derechos. Una vez que el interesado solicita la rectificación, el deber de oportunidad y razonabilidad en su publicación también involucra

⁸ Sobre la obligación de presentar la rectificación ante el medio de comunicación, antes de acudir al trámite judicial, como requisito de procedibilidad de la tutela, pueden verse, entre otras, las sentencias T-595 de 1993, T-064 de 1995, T-066 de 1998, T-605 de 1998, T-094 de 2000, T-1682 de 2000 y T-634 de 2001 de la Corte Constitucional.

al medio de comunicación dado que en criterio de la Corte la rectificación tardía es inoficiosa y extemporánea en punto de la reparación de los derechos.

*“(...) el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego previa verificación de los hechos”*⁹, precisó la corporación, cuya jurisprudencia calificó la rectificación como obligación de los medios de comunicación en la cual tiene que reconocer la equivocación cometida, pues no de otra manera puede lograrse la reparación del derecho de quien resultó afectado¹⁰.

E. Imposición de textos

Un punto de controversia sobre los alcances del derecho a la rectificación surgió alrededor de las facultades que tiene el juez cuando resuelve las acciones interpuestas contra medios que niegan las solicitudes de los afectados. La interpretación de la regulación constitucional no dejaba claro si el medio de comunicación tenía total autonomía para proceder a la rectificación bajo sus propios parámetros o sí, por el contrario, el funcionario judicial podía establecer pautas diferentes para garantizar el derecho del tercero.

Inicialmente, la Corte advirtió que los jueces no pueden imponerle titulares ni textos a los medios como medida de reparación de los derechos de los afectados con sus publicaciones. Así, los diferentes medios de comunicación contaban con amplio margen para el manejo de la información y titulación que debe publicarse en cumplimiento de las órdenes dadas por los jueces.

⁹ Corte Constitucional, sentencia T-074 de 1995, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo.

¹⁰ Acerca del parámetro de la rectificación como obligación del medio de comunicación pueden consultarse las sentencias T-332 de 1993 y T-1202 de 2000, mientras que sobre la necesidad del reconocimiento del error cometido por el medio pueden verse las sentencias T-472 de 1996, T-074 de 1995, T-684 de 1004 y T-1198 de 2004.

La práctica judicial registra varios casos en que jueces y magistrados en sus sentencias de tutela ordenaron a los medios la publicación de transcripciones textuales de contenidos y titulares producto del ejercicio de la rectificación. Durante sus primeros años, la Corte (1992) dictó algunas sentencias en las cuales incluyó en su parte resolutive sendos textos de rectificación que debieron ser divulgados literalmente por una revista, un periódico de comunicación organizacional y un noticiero de televisión¹¹.

En la mayoría de veces, la imposición de textos y titulares obedece a que el medio desacata las órdenes impartidas por los jueces y en tales condiciones la rectificación no comporta debidamente la reparación del daño causado al interesado. Frente a estas situaciones, el medio es obligado a transcribir el texto adoptado por el juez y a veces es precedido de una advertencia según la cual su publicación es producto de la orden dictada por el despacho judicial como parte de la rectificación.

F. Carga de la prueba

Finalmente, la Corte Constitucional (1993) adoptó un criterio interesante que también podría ser tenido en cuenta por el sistema interamericano de protección, dado que lo mantienen su jurisprudencia, que desde el punto de vista procesal favorece el derecho a la libertad de expresión de comunicadores y periodistas en las controversias sobre rectificación de informaciones.

Según su reiterada jurisprudencia, la regla general aplicable a la prensa, la radiodifusión, la televisión y a los nuevos medios, es que la carga de la prueba de los hechos que sustentan la

¹¹ Tales casos corresponden, respectivamente, a las sentencias T-603 de 1992, M.P. Simón Rodríguez, T-480 de 1992 M.P. Jaime Sanín Greiffestein y T-602 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

rectificación le corresponde al afectado que hace la solicitud¹². Desde sus primeros años, al resolver acciones contra medios de comunicación, la Corte indicó lo siguiente:

“(…) el principio de oro de derecho de derecho procesal de la carga de la prueba, contemplado en el artículo 177 del C. de PC conserva su vigencia, es decir, que corresponde a quien pretende desvirtuar una información y amparar su derecho en una norma que lo subsume (derecho a la rectificación subexamine), presentar las probanzas que enerven tal aseveración”

Agregó que ante la existencia de manifestaciones basadas en hechos concretos, *“... no es el medio informativo, responsable de la información, a quien le corresponde probar que está diciendo la verdad pues de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Nacional se parte de la base de que ésta es imparcial y de buena fe...”*.¹³

Este criterio no puede tenerse como absoluto para todas las controversias porque la Corte (1993) reconoció que a partir de ciertas afirmaciones hechas en una publicación periodística, como aquellas de carácter indefinido, la prueba de los hechos queda en cabeza del medio de comunicación, independientemente de los elementos que pueda aportar el afectado en su rectificación¹⁴

CONCLUSIONES

¹² Sobre la regla general que impone la carga de la prueba a quien solicita la rectificación de la información igualmente pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-595 de 1993, SU-056 de 1995, T-437 de 2004 y T-681 de 2007.

¹³ Corte Constitucional, sentencia T-050 de 1993, M.P. Simón Rodríguez, donde reiteró este criterio general establecida en un primer caso fallado contra una revista de amplia circulación nacional (T-063 de 1992, M.P. Simón Rodríguez)

¹⁴ Un buen ejemplo de esta situación puede verse en la sentencia T-050 de 1993, M.P. Simón Rodríguez, donde la Corte Constitucional condicionó la improcedencia de la rectificación de una información a las pruebas que un diario de circulación nacional debía aportar al proceso sobre las imputaciones hechas a dos organizaciones no gubernamentales.

Como parte de la libertad de expresión, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico colombiano incluyeron el derecho a la rectificación de informaciones, como importante garantía para quien resulta afectado por las publicaciones periodísticas y como mecanismo orientado a lograr el equilibrio informativo.

En desarrollo de los procesos por la difamación criminal, que opera como una especie de responsabilidad ulterior por el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la rectificación cobra especial importancia porque beneficia a comunicadores y periodistas con la exclusión de la responsabilidad penal derivada de su trabajo a través de los medios de comunicación.

La rectificación de informaciones es un derecho prácticamente en construcción, pues no es invocado por periodistas y comunicadores como alternativa de salvación en los procesos de difamación. Su relativo conocimiento fue logrado gracias al ejercicio de acciones de amparo constitucional contra los medios por la violación de derechos fundamentales de terceros.

Los restringidos alcances de la reglamentación legal del derecho a la rectificación en Colombia, que son anteriores a la preceptiva constitucional que estableció dicho mecanismo, hizo que la mayor parte de los criterios de aplicación de la rectificación de informaciones hayan sido trazados por la Corte Constitucional en sus decisiones de tutela sobre derechos fundamentales.

La eficacia de la rectificación de informaciones y la reparación de los derechos de quienes resultan afectados por las publicaciones periodísticas no quedan garantizadas con la simple

publicación de la solicitud, ya que está sometida a diversas condiciones trazadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde el requisito de la equidad informativa causa mayor controversia.

Desde el derecho interno, las pautas de la Corte Constitucional constituyen aportes importantes para el trabajo futuro del sistema interamericano de protección en el ámbito de la libertad de expresión, pues hasta ahora la Corte Interamericana no registra, como parte de su trabajo, una sentencia donde haya analizado de fondo la rectificación de informaciones en procesos contenciosos.

La incorporación de los criterios de nuestro derecho interno por parte del sistema interamericano llevaría a la ampliación del ámbito de protección de la libertad de expresión frente a la amenaza generada por la aplicación de la difamación. Esto obedece a que en caso de ser acogidos, la garantía de este derecho trascendería de los textos normativos en algunos estados donde la rectificación de informaciones tiene alcances restringidos en su aplicación.

También facilitaría que el sistema interamericano contribuya a consolidar la diferencia que existe entre la rectificación y otros mecanismos similares invocados contra los medios de comunicación, como el derecho de réplica. Dicho factor es importante porque hay estados donde aquella diferencia no opera y esta circunstancia impide el tratamiento específico de algunas situaciones ajenas a la rectificación que inciden en el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde la óptica de desarrollo jurisprudencial logrado en el derecho colombiano, La Corte Interamericana podría extender los alcances y beneficios de la rectificación a otras figuras similares a la difamación que afectan el derecho a la libertad de expresión, como las llamadas *leyes de desacato*. La ventaja que ofrece esta posibilidad es que reduciría el castigo aplicado en algunos estados, como Ecuador, por la crítica periodística hecha contra los funcionarios públicos.

La adopción de los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional colombiana por parte del sistema internacional enfrenta el riesgo de trasladar a otros ordenamientos las bases establecidas para situaciones particulares de nuestras controversias sobre libertad de expresión. Sin embargo, esta eventualidad podría ser neutralizada por la Corte Interamericana a partir de la incorporación comparativa de otros criterios que sean extensivos a los estados partes donde las legislaciones sobre difamación criminal tienen alcances similares.

A manera de ruta para el ejercicio material de la propuesta de incorporación de la jurisprudencia colombiana, estimamos que sería procedente el litigio de un caso sobre libertad de expresión que haya involucrado el ejercicio del derecho a la rectificación de informaciones. Ante las semejanzas de las legislaciones de los países americanos, podría pensarse también en la asesoría de un caso ocurrido fuera de Colombia donde los criterios fueran aplicables. Incluso admitiría la posibilidad de acudir al sistema interamericano a través de un *amicus curiae* que le aportada a la Corte una visión amplia sobre el manejo de la rectificación en el derecho colombiano y la viabilidad de su adopción por la vía jurisprudencial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Botero, José F. (2002). Delitos contra el honor, Estudio Crítico. Editorial Leyer, Bogotá.

Bertoni, Eduardo (2004). *El derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos* en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Martín, Claudia y otros (compiladores), Universidad Iberoamericana y Diario Fontamara, México.

Bertoni, Eduardo (2006). *Jurisprudencia interamericana sobre libertad de expresión: avances y desafíos* en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Abramovich, Víctor y otros (compiladores), Editores del Puerto SRL, Buenos Aires, 1ª edición.

Carvajal, Azael (1995). Los periodistas y el derecho de información en Colombia. Señal Editora, Medellín, 1ª edición.

Cámara de Representantes (2008). Proyecto de ley No. 052, por el cual se reglamenta el derecho de la información, autor Alberto Gordón May, secretaría general, Bogotá. (Archivado)

Cámara de Representantes (2008). Proyecto de ley No. 118, por el cual se derogan unos artículos de la ley 599 de 2000 contenidos en el capítulo V del código penal, de los delitos de injuria y calumnia, autor Roy Barreras, secretaría general, Bogotá. (Retirado)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (2003). La protección de la libertad de expresión y el sistema interamericano. San José, Costa Rica.

Comisión Nacional de Televisión (2009). El derecho de la televisión, tomos I y II. Bogotá, Avance Jurídico.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (1986). Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC/86, agosto 29, serie A No. 7, disponible en www.corteidh.or.cr

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004). Sentencia Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de julio 24, serie C No. 107, disponible en www.corteidh.or.cr

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004). Sentencia Caso Ricardo Canese vs Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de agosto 31, serie C No. 111, disponible en www.corteidh.or.cr

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008). Sentencia Caso Kimel vs Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de mayo 2, serie C No. 177, disponible en www.corteidh.or.cr

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009). Sentencia Caso Usón Ramírez vs Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de noviembre 20, serie C No. 207, disponible en www.corteidh.or.cr

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011). Sentencia Caso Fontevecchia y D'Amico vs Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de noviembre 29, disponible en www.corteidh.or.cr

Fajardo, Luis A. (2009). Influencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del bloque de constitucionalidad, Medellín, Jurídica Diké Editora.

Fernández, Carlos (1992). Derecho a la identidad personal, Buenos Aires, Editorial Astrea.

Grossman, Claudio (2007). *La libertad de expresión en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos* en Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), No. 46, julio-diciembre, San José Costa Rica.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (2003). Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión. San José, Costa Rica.

Juzgado 41 Penal del Circuito (2006). Sentencia caso Graciela Torres Sandoval. Delito injuria. Radicación No. 327-2003, Bogotá.

Juzgado 4º Penal Municipal con funciones de conocimiento (2010). Sentencia caso Alfredo Molano Bravo. Delito injuria y calumnia. Bogotá.

Juzgado 23 Penal con funciones de conocimiento (2011). Sentencia caso Claudia López. Delito injuria y calumnia. Radicación No. 1100160000049200605352, Bogotá.

Pérez, Luis C. (1991). Derecho Penal, tomo V, Bogotá, Temis.

Pizarro, Ramón (2004). Daño Moral. Prevención, reparación, punición. El daño moral en las diferentes ramas del derecho. Colección Responsabilidad Civil. Buenos Aires, Editorial Hammurabi.

Restrepo, Carlos (1995). Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Santos, Jorge (2005). Instituciones de Responsabilidad Civil, Tomo II. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá.

Tamayo, Javier (2007). Tratado de responsabilidad civil, tomos I y II, Bogotá, Legis.

Tribunal Superior de Cundinamarca (2012). Sentencia caso Luis Agustín Gozález. Delito injuria y calumnia. Sala Penal, radicación No. 252906000652200980062-01, Bogotá.

Uprimny, Rodrigo y otros (2006). Libertad de Prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005). Konrad Adenauer Stiftung y otros, Bogotá.

Uprimny, Rodrigo (2002). *El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal* en Complicación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, volumen I, Bogotá.

Villalobos, Enrique (1984). Un derecho olvidado: el derecho de respuesta en la prensa. Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica.

Zannoni, Eduardo A. y Bísaro, Beatriz R. (2003). Responsabilidad de los medios de prensa. Editorial Astrea, Buenos Aires.

Corte Constitucional (1992), sentencia T-063

Corte Constitucional (1992), sentencia T-480

Corte Constitucional (1992), sentencia T-512

Corte Constitucional (1992), sentencia T-603

Corte Constitucional (1993), sentencia T-048

Corte Constitucional (1993), sentencia T-050

Corte Constitucional (1993), sentencia T-080

Corte Constitucional (1993), sentencia T-332

Corte Constitucional (1993), sentencia T-595

Corte Constitucional (1995), sentencia T-062

Corte Constitucional (1995), sentencia T-411

Corte Constitucional (1996), sentencia T-404

Corte Constitucional (1996), sentencia T-472

Corte Constitucional (1998), sentencia T-066

Corte Constitucional (1998), sentencia T-605

Corte Constitucional (1998), sentencia C-087

Corte Constitucional (1999), sentencia T-605

Corte Constitucional (2000), sentencia T-1202

Corte Constitucional (2000), sentencia SU-1721
Corte Constitucional (2001), sentencia T-1319
Corte Constitucional (2003), sentencia C-162
Corte Constitucional (2004), sentencia T-437
Corte Constitucional (2004), sentencia T-684
Corte Constitucional (2004), sentencia T-1184
Corte Constitucional (2007), sentencia T-626
Corte Constitucional (2007), sentencia T-681
Corte Constitucional (2009), sentencia T-219
Corte Constitucional (2009), sentencia C-417
Corte Constitucional (2011), sentencia C-442